



MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL  
DE GOBERNANZA PÚBLICA

Expediente: 001-010996

Nombre: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha de 11 de enero de 2017 tuvo entrada en la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales-Presidencia del Gobierno solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentada por [REDACTED], que quedó registrada con el número 001-010996:

*"Buenos días, desearía me enviaran información sobre las bases normativas de la Transparencia.*

*- Marco Europeo: Bases jurídicas y antecedentes de aplicación en Europa, sobre la Transparencia; Normativa comunitaria que obliga o sustenta su desarrollo (directivas, reglamentos...) y antecedentes que sirven de referencia; y si es posible los enlaces para acceder con este apoyo, a la información que me envíen; Dirección General, Unidad administrativa o institución comunitaria competente en la implantación, gestión y seguimiento de la Transparencia.*

*Referencias que se tomaron para la redacción de la ley de transparencia española.*

*Información con enlaces de direcciones web de dos o tres países con mayor tradición y experiencia en Transparencia en Europa.*

*- Marco Internacional: Referencias legales de transparencia en EEUU, y algún otro país avanzado significativo en Transparencia, para analizar sus contenidos y evolución.*

*- Marco autonómico: Existe un enlace donde puedo consultar las leyes de transparencia de las Comunidades Autónomas? Existe algún estudio comparado al respecto, entre la Ley e transparencia y su desarrollo en las CCAA?*



- *Evolución y Control: A dos años vista de la implantación de la Ley de transparencia, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, finalizada en su mayor parte su desarrollo legal, aparecen comparados a través de cuestionarios como los de Transparencia Internacional, en cuanto a su nivel de implantación y ámbito de transparencia: Las entidades recogidas en el art 2 dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013 analizan o se prevé que analicen su Transparencia de forma similar? Anticipándome a su respuesta, les doy las gracias por su interés, y les ruego, si es posible, me faciliten todos los enlaces para acceder a la información que me remitan como contestación a la solicitada; Atentamente”.*

Con fecha de 25 de enero de 2017 esta solicitud se recibió en la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Pese a que podría entenderse que su solicitud no responde a la definición de “información pública” contenida en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (“*contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones*”), puesto que lo que se está solicitando es información en buena medida de carácter europeo, internacional o de Comunidades Autónomas y no documentos o contenidos generados en el ejercicio de sus funciones por la Administración General del Estado, **se concede el acceso a la información** en los términos siguientes:

Por lo que se refiere al “marco europeo”, tanto la Unión Europea como gran parte de sus Estados miembros cuentan con una normativa específica sobre acceso a la información pública. En el Derecho comunitario, el derecho a la información en poder de las Instituciones, órganos y Agencias comunitarias se contempla en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Su reconocimiento se vincula expresamente con el principio de democracia y transparencia y con la libertad de información, y se ha regulado específicamente en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, al que puede acceder a través del siguiente enlace:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN>.

El citado Reglamento está actualmente en proceso de reforma para precisar y ampliar su ámbito de aplicación.



En el ámbito de la Unión Europea podrían citarse también, entre otras muchas normas relativas al acceso a los documentos, las siguientes: el *Libro verde sobre acceso del público a los documentos de las instituciones de la Comunidad Europea*, del año 2007 (accesible en: [http://ec.europa.eu/transparen/revison/docs/gp\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/transparen/revison/docs/gp_es.pdf)); o los informes anuales del Consejo de la UE sobre el acceso a los documentos (el último publicado hasta la fecha es de 2014, que puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/2015/council-annual-report-access-documents-2014/>).

En cuanto a las referencias que se tomaron para la redacción de la ley de transparencia española, la norma se inspiró en el Derecho europeo que ha sido objeto de intenso estudio. En todo caso el anteproyecto de la ley de transparencia española no se presentó como transposición de normativa comunitaria, ya que, hasta el momento, la materia que regula se ha mantenido dentro de la competencia de los Estados, con las excepciones de la información en materia de medio ambiente y la reutilización de información del sector público, en los que como consecuencia de la transposición de sendas Directivas comunitaria contamos en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003.

Durante la elaboración del anteproyecto de Ley de transparencia se tuvo presente asimismo el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, de 18 de junio de 2009 que puede consultarse en: <http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/205>).

Para conocer las referencias que se tomaron para la redacción de la ley de transparencia española se sugiere también la consulta del "*Dossier legislativo sobre transparencia y acceso a la información pública*" elaborado por el grupo de expertos creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales durante la tramitación del anteproyecto de ley de transparencia, que incluye enlaces y bibliografía sobre la materia referida a distintos ámbitos (organismos internacionales, Unión Europea, otros Estados, España, Comunidades Autónomas...). Dicho dossier se encuentra accesible en: <http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/dossierestematicos/dossier-legislativo-transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf?sfvrsn=0>



En relación con el “marco internacional” le sugerimos la consulta del *Estudio comparado sobre normativa internacional en materia de derecho de acceso a la información pública* publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en 2016, accesible en la web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

[http://www.consejodetransparencia.es/ct\\_Home/consejo/criterios\\_informes\\_consultas\\_documentacion/documentacion.html](http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/documentacion.html)

Sobre el “marco autonómico”, le comunicamos que el Portal de la Transparencia del Gobierno de España cuenta con un espacio específico donde puede encontrar los enlaces a la normativa y portales autonómicos referidos a la transparencia:

[http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia\\_Home/index/Mas-Transparencia/Comunidades-autonomas.html](http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Mas-Transparencia/Comunidades-autonomas.html)

En el mismo ámbito le sugerimos también la consulta de la obra *La normativa autonómica en materia de derecho de acceso a la información pública*, publicada por el INAP en el año 2016, accesible en el siguiente enlace:

[http://www.consejodetransparencia.es/ct\\_Home/consejo/criterios\\_informes\\_consultas\\_documentacion/documentacion.html](http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/documentacion.html)

Por lo que se refiere a la “evolución y control”, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el organismo encargado de evaluar la transparencia en el ámbito de la Administración General del Estado, así como a los órganos independientes que en su caso constituyan las Comunidades Autónomas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional cuarta de la Ley de transparencia.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La Directora General de Gobernanza Pública

María Pía Junquera Temprano